

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL, LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES RESPECTO A LO RESUELTO EN EL ACUERDO INE/CG80/2016 RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/PRCE/CG/17/2015 Y SUS ACUMULADOS UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/18/2015, UT/SCG/PRCE/FEPADE/CG/21/2015 Y UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/24/2015, INCOADO EN CONTRA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA Y LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE HECHOS QUE PODRÍAN CONFIGURAR UNA DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 102, PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “Constitución”); 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante “LGIPE”), 13, párrafo 1, fracción b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento **VOTO PARTICULAR, respecto del punto 4 del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el pasado 19 de febrero de 2016, relativo a la resolución del Consejo General de dicho Instituto, en relación con el procedimiento de remoción de consejeros electorales** identificado con el número de expediente UT/SCG/PRCE/CG/17/2015 y sus acumulados UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/18/2015, UT/SCG/PRCE/FEPADE/CG/21/2015 y UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/24/2015, **incoado en contra de la Consejera Presidenta y las y los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y**

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por la presunta comisión de hechos que podrían configurar una de las causales de remoción, previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la LGIPE, identificado con la clave INE/CG80/2016, en atención a los razonamientos que se exponen en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El viernes 19 de febrero de 2016, **las Consejeras y Consejeros** que integramos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral **nos enfrentamos a una de las determinaciones de mayor trascendencia para la eficacia del sistema político-electoral mexicano y la tutela de los derechos** que en este ámbito la Constitución reconoce a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país: **determinar si resultaba procedente la remoción de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tras acreditar** —a través de la sustanciación del procedimiento previsto legalmente para tal efecto— **que en su totalidad, incurrieron en notoria negligencia y descuido en el desempeño de sus funciones, en dos ámbitos:**

- i) El proceso de seguimiento, control y vigilancia del sistema de voto electrónico para los ciudadanos de Chiapas residentes en el extranjero** —actividad preponderante del Comité Técnico Especial de la autoridad en cuestión, integrado por 6 de los 7 integrantes con derecho a voto del Consejo General de dicho Instituto—, que conllevó el incumplimiento de los principios rectores de la función electoral y una vulneración grave a los derechos humanos político-electorales reconocidos en la Constitución y;

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

- ii) La verificación del cumplimiento del requisito de paridad de género en la postulación de candidaturas para la integración de la legislatura local y los Ayuntamientos de dicha entidad, que derivó en la inobservancia de obligaciones constitucionales, legales y jurisprudenciales claras, directas y expresas.**

La reforma político-electoral de 2014 instauró un nuevo modelo de distribución de competencias —en el ámbito administrativo electoral— para la dirección, organización y vigilancia de los procesos electorales en nuestro país. **Creó el Instituto Nacional Electoral, dotándole de un conjunto de facultades y obligaciones, con el objeto de materializar su carácter de autoridad nacional** y, en razón de ello, dejar claro el alcance que tienen sus mandatos para los Organismos Públicos Locales.

Así, **se puso en manos de esta autoridad no sólo la elección y, en casos graves, la remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, sino** que se le concedieron **una serie de facultades para incidir en el diseño y desarrollo de los procesos electorales bajo su conducción**; me refiero puntualmente, a la posibilidad que tenemos de asumir la realización de las actividades que por disposición constitucional o legal son conferidas a dichos Organismos; de delegarles atribuciones —sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento—; de atraer a nuestro conocimiento cualquier asunto de su competencia originaria —cuando la trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación— y; aunado a ello, de ser responsables directos de actividades propias de la función electoral a nivel local y poder emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan.

El mensaje legislativo fue absolutamente claro, **se buscó que** este Instituto, a través de **las Consejeras y Consejeros que integramos su órgano máximo de dirección, asumiéramos la conducción nacional de la materia electoral. Nos resulta exigible** para el ejercicio de esa función —a todas y todos quienes integramos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral—, **tener conciencia de que la** distribución de competencias y determinación de facultades arrojadas por la **reforma partió del reconocimiento tanto de la fortaleza de esta institución y la confianza en ella, como de un contexto político y social caracterizado por el constante y legítimo cuestionamiento a las autoridades electorales locales y su actuación.**

Es mi convicción que, **la decisión de cuatro de los integrantes de este Consejo General, que no permitió que se obtuviera la mayoría calificada** que la ley nos exige **para determinar la remoción de la totalidad de las Consejeras y Consejeros Electorales** de los Organismo Público Local **de Chiapas, no estuvo a la altura de la responsabilidad que la reforma nos confirió.**

El cambio en la sede de la designación de quienes dirigen los Organismos Públicos Locales Electorales buscó impedir la influencia que, contraria a la autonomía, los gobernadores y los poderes públicos locales ejercían en este ámbito. **El objeto de dotar a este Consejo General de esa atribución era precisamente garantizar el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral y la tutela de los derechos político-electorales.**

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

¿Qué razón o argumento es válido alegar para justificar que, **no obstante está plenamente acreditada la responsabilidad de la totalidad de las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por actuar con notoria negligencia y descuido en el desempeño de sus funciones** —contraviniendo principios y vulnerando derechos que les correspondía tutelar—, **cuatro de los siete integrantes de ese órgano de dirección podrán seguir en el desempeño de sus funciones, dado que sólo se obtuvo la mayoría calificada para la remoción de tres?**

No hay respuesta, **no existe forma de justificar y explicar a la opinión pública, pero en particular a las ciudadanas y ciudadanos de Chiapas, que quienes en el ejercicio del encargo público que les fue conferido por determinación del Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, actuaron con negligencia y vulneraron de forma irreparable sus derechos, seguirán siendo responsables de dirigir la organización de futuras elecciones en esa entidad.**

Desde el momento en que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por primera vez ejerció esta nueva atribución, sabíamos que **quienes fueran designadas Consejeras y Consejeros Electorales**, no tendrían como reto mayor la solución de problemas técnico-operativos; que **se enfrentarían ante un legítimo reclamo de la ciudadanía para garantizar la equidad, tutelar los derechos y dar certeza de las reglas aplicables a la competencia político-electoral, particularmente, ante una realidad social** —en que la desigualdad para el ejercicio de los derechos y la falta de acceso a la procuración e impartición de justicia en los diferentes ámbitos, siguen siendo la constante— **que reclama un agudo sentido de responsabilidad, ética y eficacia en el servicio público.**

Este Consejo General determinó las designación de las Consejeras y Consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; eso no implica que seamos responsables de las omisiones y acciones

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

en que han incurrido, pero sin lugar a dudas, **derivado de dicha determinación y a partir de la acreditación de su responsabilidad en los hechos denunciados, nos resultaba exigible ejercer las atribuciones constitucionales y legales con que contamos para determinar su remoción; para garantizar la sanción de conductas graves contrarias a nuestro sistema jurídico y político-electoral, y con ello impedir que sigan incumpliendo los principios rectores de la función electoral y vulnerando los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de Chiapas.**

Estamos ante hechos que revisten una gravedad particular, en que la totalidad de las Consejeras y Consejeros Electorales en su calidad de integrantes del órgano colegiado máximo de dirección, fueron partícipes y responsables directos de las conductas acreditadas por este Instituto.

SEGUNDA. Para efecto de visibilizar la gravedad de los hechos e infracciones, es necesario dar cuenta de las conductas desplegadas por las Consejeras y los Consejeros Electorales, mismas que están plenamente acreditadas con la investigación realizada por esta autoridad.

Voto desde el extranjero

No obstante que en diversos momentos en el seno del Comité Técnico Especial encargado de la coordinación de las actividades tendentes a recabar el voto en el extranjero, en sesiones del Consejo General del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas, y previo a la jornada electoral, las Consejeras y Consejeros denunciados contaron con elementos suficientes para advertir la posible existencia de irregularidades en el procedimiento de registro para la inclusión de ciudadanas y ciudadanos en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero del estado de Chiapas, y que adicionalmente, los representantes de los partidos políticos les alertaron —en el seno de los

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

referidos órganos colegiados— **sobre las dudas que generaban cifras tan altas de registro, y las implicaciones que ello tenía para dotar de certeza el ejercicio del derecho al voto activo y pasivo, las Consejeras y los Consejeros Electorales omitieron llevar a cabo cualquier acción para identificar la problemática con claridad, y en su caso, implementar acciones para atenderla.**

No se trataba de hechos menores, o de datos subjetivos; **las cifras con que contaron y que fueron presentadas en los distintos órganos colegiados permitían presumir irregularidades en el procedimiento de registro que, de no atenderse, afectarían de forma irreparable el principio de equidad y, en consecuencia, la efectividad del sufragio.** Para dar cuenta de lo evidente de los datos, **basta señalar algunos de ellos:**

i) en 2012 —año en que se celebró tanto la elección presidencial como la de Gobernador, en las que estadísticamente se incrementa el porcentaje de participación ciudadana— **se recibieron 1,258 solicitudes, y** con motivo del Proceso Electoral Local de **2015** —en que se únicamente se eligieron diputados locales e integrantes de ayuntamientos—, **la cifra ascendió a 17,573, lo que implicó un crecimiento exponencial del 1,396%;** cifra desproporcionada, que no cuenta con algún antecedente que la pudiera justificar;

ii) el plazo para registro duró cerca de 3 meses; en los primeros dos meses se registraron 487 personas, y **en el último mes se recibieron 17,086 solicitudes;** pero no sólo esto, **en los 6 últimos días se registraron poco más de 10,000 ciudadanos,** según se advierte de la tabla siguiente, que obra en la resolución materia de este voto particular:

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL



iii) los países desde los que se formularon las solicitudes de registro en cuestión también permitían identificar o presumir posibles irregularidades, dado que **no son identificados como destinos comunes de residencia para mexicanos en el extranjero**; a modo de ejemplo, vale la pena señalar las siguientes:

PAÍS	SOLICITUDES
Alemania	71
Andorra	3
Angola	5
Arabia Saudita	1
Armenia	4
Australia	30
Bélgica	6
Cape Verde	8
China	4
Croacia	2
Eslovaquia	1
Finlandia	1
Holanda	4

PAÍS	SOLICITUDES
Hungría	1
Irlanda	4
Japón	3
Liberia	9
República Checa	20
Suiza	19
Uganda	4
Vietnam	5
ZZ_Anonymous Proxy (*)	195
ZZ_Error_BD (*)	4
ZZ_errro_BD (*)	16
ZZ_Sin IP (*)	144

Nota: los registros identificados con (*) corresponden a IP's en las que no era identificable un país.

A pesar de las alertas, hubo una actitud abiertamente pasiva de la totalidad, sin excepción, de las y los Consejeros Electorales para atender la preocupación y adoptar determinaciones que contribuyeran a dotar de

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

certeza el procedimiento para el ejercicio de este derecho fundamental. No se materializó ni se solicitó la realización de alguna acción oportuna o eficaz que permitiera investigar los hechos, y que significara acciones preventivas para evitar lo que derivó en un fraude electoral.

Prueba de lo anterior, es que **en el marco de la investigación llevada a cabo por esta autoridad se encontraron posibles inconsistencias entre el país en que presuntamente se realizó la solicitud de registro y el país en que fue ejercido el voto desde el extranjero;** es decir, contamos con casos en que, por ejemplo, la solicitud de registro se llevó a cabo en Alemania, pero el voto se registró desde Guatemala, o se solicitó el registro en Ecuador, y se votó desde Bolivia.

Aunado a esto, y sin duda, de mayor gravedad, del **análisis realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto Nacional Electoral, a una muestra de personas encuestadas que formaron parte de la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero del estado de Chiapas, revela que el 100% de las personas que fueron localizadas afirmaron no haber realizado dicho trámite ni, consecuentemente, haber votado desde el extranjero, aun cuando al menos en el caso del 59% de ellas, su voto se registró en el sistema implementado para dicho fin.**

También **se acreditó que el día de la jornada electoral, al menos 377 personas no pudieron ejercer su derecho de votar en Chiapas aun cuando era su lugar de residencia, por estar inscritas en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero del estado de Chiapas, sin que lo hubiesen solicitado. Ello, en franca violación de ese derecho político-electoral, así como de los principios rectores de la función electoral.**

Las pruebas permiten confirmar que **se utilizó indebidamente un mecanismo para hacer una simulación que derivó en un fraude electoral que está**

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

confirmado, y merced al cual, un conjunto de ciudadanas y ciudadanos no pudieron sufragar, por un lado, y otro conjunto no lo hicieron, y sin embargo, su voto se contabilizó en la elección, por otro.

De haber realizado un debido seguimiento y control o, en su caso, de haber atendido los cuestionamientos que les fueron expuestos, las y los Consejeros habrían advertido a tiempo las irregularidades e impedido una afectación irreparable al ejercicio efectivo del voto.

No fue así, la negligencia y descuido en el ejercicio de la función electoral son evidentes como lo señala la resolución. La totalidad de las Consejeras y los Consejeros del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas, no sólo vulneraron normas, sino que afectaron —con su conducta pasiva, negligente y omisa— de forma irreparable los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos de Chiapas que estaban obligados a tutelar.

Cumplimiento del principio de paridad de género

No obstante que la Constitución mandata expresamente a los partidos políticos como obligación para contender en los procesos electorales dar cumplimiento al requisito de paridad de género en la postulación de candidaturas, por votación unánime y, omitiendo exponer alguna justificación que sostuviera la inobservancia de dicho principio, las Consejeras y los Consejeros Electorales de Chiapas otorgaron el registro:

- **De las planillas para Ayuntamientos presentadas por los 10 partidos políticos que contendieron en el proceso local, sin que cumplieran con el requisito constitucional.** Los casos más representativos de este incumplimiento son los relativos al Partido del Trabajo que presentó planillas integradas por 92.65% de hombres y 7.35% de mujeres (63 y 5); el Partido Verde Ecologista de México que registró planillas, cuya conformación

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

correspondía a 88.33% de hombres y 11.67% de mujeres (106 y 14); y el Partido Revolucionario Institucional, que registró a 87.93% de hombres y 12.07% de mujeres (102 y 14) en las candidaturas para integrar los Ayuntamientos.

- **De las fórmulas de candidatos a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, de igual forma, sin que se cumpliera el requisito de paridad.** Para dar cuenta de la gravedad, basta señalar que se concedió el registro a las fórmulas del partido Nueva Alianza integradas por 71.43% de hombres y 28.57% de mujeres (5 y 2); del Partido Encuentro Social, cuya conformación era de 69.57% de hombres y 30.43% de mujeres (16 y 5), y al Partido de la Revolución Democrática que presentó fórmulas integradas en un 66.67% por hombres y 33.33% por mujeres (16 y 8).

Este incumplimiento implicó la inobservancia de normas constitucionales, legales y de jurisprudencias dictadas previamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —mismas que les resultaban obligatorias derivado de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación— que no sólo mandatan, sino desarrollan los términos en que debe darse el cumplimiento de este principio.

La determinación de las Consejeras y los Consejeros Electorales se tradujo en eximir a los partidos políticos de una obligación constitucional que fue incorporada en el marco de la reforma político-electoral de 2014, al reconocerse que existen brechas de desigualdad que impiden a las mujeres acceder en condiciones de igualdad con los hombres a las candidaturas de elección popular y, derivado de ello, al ejercicio del poder público.

En el contexto referido, es mi convicción que la decisión de cuatro de los Consejeros Electorales que integran este Consejo General de **no votar a favor de la remoción de la totalidad de los integrantes del órgano de dirección del**

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

Instituto en cuestión no encuentra asidero o justificación legal alguna, dado que tanto la determinación del registro de las candidaturas sin cumplir con el requisito de paridad, como el procedimiento para el ejercicio del voto desde el extranjero fueron decisiones conocidas, colegiadas y adoptadas por la totalidad de los integrantes de dicho órgano de dirección; las constancias que obran en el expediente permiten advertir que no hay condiciones o circunstancias que diferencien las responsabilidades en unos u otros casos, por tratarse de decisiones colegiadas, en las que no hubo actuaciones individuales en un sentido diverso al del colegiado.

En este sentido, las disposiciones legales que como ente colegiado les mandatan el cumplimiento de diversas responsabilidades, analizadas a la luz del caso concreto, permiten confirmar que **faltas como las cometidas no pueden ser diferenciadas para sólo algunos de quienes integran el Consejo General**, máxime que ninguno de sus integrantes tuvo una actitud distinta del resto, ni alguno de ellos llevó a cabo alguna acción eficaz para evitar los resultados de las conductas que fueron motivo de las denuncias. **No existe constancia alguna en el expediente que permita acreditar niveles de responsabilidad diferenciados.**

Es decir, la notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que debían realizar, y la violación grave no puede sólo atribuirse a alguno o algunos de quienes integran el Consejo General, cuando todos fueron partícipes de las determinaciones expuestas, y todos —sin excepción— mostraron una actitud pasiva ante hechos de los que no sólo conocieron, sino incluso se les alertaron.

TERCERA. Como se señaló en el primer considerando de este pronunciamiento, todas y cada una de **las Consejeras y los Consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas**, sabían que **ejercer esa función implicaba contar con un agudo sentido de**

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

responsabilidad, un profundo conocimiento de los riesgos e implicaciones que cada una de sus determinaciones tenía para la tutela de derechos fundamentales, en otras palabras, que adquirirían un fuerte compromiso democrático, aparejado de responsabilidades en su carácter de servidores públicos, entre ellas, la posibilidad de ser removidos de su encargo ante las actuaciones y omisiones graves previstas en ley.

Asimismo, **las Consejeras y los Consejeros que integramos el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral, sabíamos que la manera de honrar el voto de confianza que nos confirió la reforma electoral, no se circunscribía a cumplir con el mandato de realizar designación de las Consejeras y los Consejeros integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales; sino también al hecho de asumir la responsabilidad de determinar la remoción de los integrantes de estos Organismos electorales cuando se actualicen los supuestos previstos en la ley y, en los casos en que se tuviera certeza de que el actuar de las Consejeras y los Consejeros Electorales era contrario al interés público.**

Es mi convicción que la decisión de cuatro de los integrantes de este Consejo General, que no permitió que se obtuviera la mayoría calificada que la ley nos exige para determinar la remoción de la totalidad de las Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismo Público Local de Chiapas, resulta inadmisibles, ya que, como se ha señalado, está plenamente acreditada su responsabilidad en los hechos investigados.

Esta decisión se traduce en evadir una de las responsabilidades mayores que la reforma política nos confirió para la eficacia del sistema político-electoral vigente, y, particularmente, para inhibir actos que pongan en riesgo la tutela de los derechos.

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

Es lamentable la determinación, pues **estamos ante actos graves cometidos por ciudadanas y ciudadanos en quienes se depositó la responsabilidad de Estado de fungir como integrantes del órgano de dirección de la autoridad administrativa electoral del estado de Chiapas**. El servicio público conlleva el deber y responsabilidad de actuar permanentemente bajo los principios que rigen su función, a la luz del interés público y la tutela efectiva de los derechos humanos, en este caso, de los derechos político-electorales que la Constitución confiere a los ciudadanos.

Por ello, **no puedo acompañar la postura asumida y el sentido del voto de cuatro de los Consejeros de este Instituto Nacional Electoral relativa a remover a sólo tres de los siete Consejeros y Consejeras Electorales que integran el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas**.

La posición diferenciada respecto de la responsabilidad de los integrantes del órgano de dirección del Instituto local **no guarda congruencia con las evidencias encontradas, carece de motivación y, en consecuencia, no permite entender las razones que sustentan el por qué sólo tres de los consejeros son removidos**.

Lo más grave es que, no obstante que la mayoría de las Consejeras y Consejeros Electorales que integramos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral votamos a favor de la remoción de la totalidad de los denunciados, al no haberse obtenido una mayoría calificada, se envía el mensaje de que esta autoridad, en contravención a su mandato constitucional y legal, tolera actos ilegales y fomenta la impunidad, en un contexto político y social caracterizado por la desconfianza y cuestionamiento de legitimidad de las instituciones públicas.

VOTO PARTICULAR
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución; 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la LGIPE, 13, párrafo 1, fracción b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presento **VOTO PARTICULAR, respecto** del punto 4 del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el pasado 19 de febrero de 2016, relativo a **la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del procedimiento de remoción de consejeros electorales** identificado con el número de expediente UT/SCG/PRCE/CG/17/2015 y sus acumulados UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/18/2015, UT/SCG/PRCE/FEPADE/CG/21/2015 y UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/24/2015, **incoado en contra de la Consejera Presidenta y las y los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por la presunta comisión de hechos que podrían configurar una de las causales de remoción, previstas en el artículo 102, párrafo 2, de la LGIPE.**

LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES
CONSEJERA ELECTORAL